

12 ES

La crisis en Europa y los debates estratégicos - François Sabado

1. Josep Maria Antentas: *Notas incompletas sobre la situación política en Europa*
2. Daniel Albarracín, Nacho Álvarez y Bibiana Medialdea: *La crisis del sistema euro: análisis y alternativas*



Notas incompletas sobre la situación política en Europa - Josep Maria Antentas

Notas incompletas sobre la situación política en Europa - Josep Maria Antentas 1. La economía europea sigue inmersa en la crisis. El propio FMI pronostica que 2012 va a terminar con un crecimiento del -0'4% y 2013 con un 0'2%. La recesión es particularmente importante en la periferia, sobretodo en Grecia y el Estado español (caída de éste último del 1'5 y 1'3% en 2012 y 2013) y con un débil crecimiento en el centro, con previsiones del 0'9% para Alemania. El estancamiento económico general y la política de austeridad afecta a ésta última de forma negativa, pues sus exportaciones al resto de Europa tienden a caer (descendieron un 11,4%, a Portugal un 15,8%, a Grecia un 9%, y a Italia un 8,6%) y no se compensan con el aumento de sus exportaciones a Estados Unidos y China. La crisis genera tensiones en todo el edificio de la UE y la zona euro y acentúa las dinámicas internas neocoloniales y centro-periferia. En este contexto la Europa mediterránea se ha convertido en el lugar donde se condensan todas las tensiones políticas y sociales de la crisis. El futuro del euro sigue siendo incierto, aunque la política de Alemania pasa por mantener la moneda única, tensando la cuerda pero sin romperla, necesaria para favorecer sus exportaciones. La fuga de capitales continuada de la periferia al centro (el Estado español ha sufrido salidas de capital entre junio de 2011 y junio de 2012 de 296.000 millones de euros, 27% del PIB de 2011, mientras que Italia ha registrado salidas de 235.000 millones de euros, un 15% del PIB de 2011), y la disparidad entre las primas de la deuda soberana de Alemania y países como el Estado español o Italia muestran la situación de riesgo para el euro.

El factor más inmediato que marca la agenda europea es el rescate total al Estado español que viene planeando en la política europea desde hace meses. Aparentemente inminente desde hace semanas, parece ahora que puede alejarse un poco. Más allá de las dudas del gobierno español y, sobretodo de la propia Alemania, la cuestión seguirá encima de la mesa, en un escenario donde también hay que a Italia, Chipre y Eslovenia. En Grecia la crisis política no dejará de agravarse y la estrategia de la troica pasa por preparar un cortafuegos que, en caso de tener que desconectar al país helénico del euro, impidiera un efecto dominó.

En esta situación el debate sobre el Euro cobra fuerza entre la izquierda europea, aunque en el único país donde es un debate real amplio más allá de reducidos círculos, es en Grecia. En su momento desde la izquierda anticapitalista nos opusimos a la creación del Euro, en tanto que proyecto al servicio de los poderes económicos principales de la UE y perjudicial para los trabajadores. Una vez puesto en marcha y de haberse consolidado aparentemente como realidad insoslayable la política más adecuada fue poner el énfasis en una ruptura en clave internacionalista y solidaria (oposición a todos los Tratados, Constitución, Directivas...), sin plantearla cuestión en términos de “salida” de la UE o del Euro. Enfocar la ruptura con la Europa del Capital en clave internacionalista y no con mentalidad de repliegue nacional-estatal sigue siendo una cuestión estratégica. Sin embargo, la evolución de la situación pone encima de la mesa la cuestión concreta de la moneda, del Euro que ya no aparece como un hecho irreversible. No hay que hacer en este contexto de la salida del Euro un tabú, ni dar su existencia por descontado como sucedía antes de la crisis.

Sin embargo, no creo que haya que plantear la salida del Euro como una reivindicación programática a priori, ni que centrar el debate entorno a la moneda sea lo fundamental, sino que es mejor colocar la cuestión de la salida del Euro como posible consecuencia de la ruptura con las

políticas de austeridad: suspensión pago deuda, no aplicación de las políticas de ajuste y revocación de los recortes realizados, expropiación de la banca... Es decir, un eventual gobierno de izquierdas en cualquier país europeo más que salir voluntariamente del Euro lo que tendría que hacer es romper con las políticas impuestas por la troika y asumir la posibilidad de una expulsión del Euro, algo que por otra parte tampoco no es seguro al 100% que ocurriera sobretodo si esto sucediera en un país económicamente relevante (Estado español, Italia...) por las consecuencias que podría acarrear por la pervivencia del propio Euro. Ante un escenario de “desobediencia” por parte de un país a la troika ésta por un lado se vería obligada a castigar tal insubordinación, para evitar que el ejemplo se generalizara, pero al mismo tiempo podría tener dificultades en expulsar drásticamente a un Estado de la zona Euro si éste tuviera peso económico, o a dos Estados si hubiera una insubordinación en dos países a la vez. Un gobierno de izquierdas debería estar preparado para salir del Euro y tendría que preparar a la población para ello, pero no veo utilidad en plantear una salida voluntaria a priori. 2.Lo que está en marcha es un amplio proyecto de reorganización social y de cambio de modelo social bajo los designios del capital financiero. No es un proyecto acabado, ni coherente, ni planificado en su totalidad pero, sin duda, lo que está en juego es un cambio en profundidad y drástico del actual modelo social. En la periferia europea asistimos a una “latinoamericanización”/“tercermundización” de las sociedades euromediterráneas en términos de modelo de sociedad (desigualdad, desestructuración social, aumento de las violencias...). Y en el centro continental se profundiza la destrucción del llamado “modelo social europeo” y de los restos del “capitalismo renano” avanzando, a modo de una “norteamericanización” del continente, hacia un modelo de capitalismo desregulado salvaje. Ésta ha sido la trayectoria de Alemania tras las reformas de Schroder y las leyes Hartz a comienzos de siglo. La transformación del modelo social implica un cambio de régimen político. La involución oligárquica de las democracias parlamentarias se profundiza e intensifica. Tiene lugar un vaciado de contenido, una implosión, de los mecanismos democrático-institucionales tradicionales de los países europeos, por la supeditación extrema de la política a los intereses del capital financiero, cuyas máximas expresiones han sido los “golpes de estado financieros” de Grecia e Italia y la colocación en posiciones institucionales clave en la UE y en muchos países de hombres de Goldman Sachs. En momentos de crisis, mejor tomar directamente el timón de la nave.

En los países de la periferia la crisis económica y social se convierte en una crisis política cada vez más profunda con procesos crecientes de deslegitimación de instituciones y partidos políticos mayoritarios y de rechazo a las élites financieras. En Grecia, el caso más avanzado, acontece una crisis de hegemonía que no cesa de profundizarse que ha provocado una explosión del sistema tradicional de partidos. En el Estado español el rechazo a “políticos y banqueros”, que fue el lema fundacional del 15M, sólo hace que aumentar y se va entrando en una dinámica creciente de “crisis de régimen” en la que se entremezcla el desgaste de las instituciones del Estado (incluido el Rey aunque de forma matizada) y de los dos grandes partidos por su gestión pro-banqueros de la crisis con la crisis del modelo de Estado y el ascenso del independentismo en Catalunya y Euskadi.

La profundización de las consecuencias políticas de la crisis en Grecia, Portugal y el Estado español, del sistema de partidos tradicional, de los estallidos sociales y de los problemas de “gobernabilidad” hacen prever un deterioro de la situación política, en países donde además la tradición “democrática” de sus elites políticas y empresariales es muy superficial e históricamente poco arraigada. Aumentará la represión policial, el endurecimiento de las leyes y la violación reiterada por parte del poder de su propia legalidad y reglas del juego cuando sea necesario, en el marco de una creciente involución autoritaria de la vida política y social, a la que hay que añadir el aumento o irrupción de la extrema derecha. El recurso a salidas autoritarias, cuya concreción puede tomar muchas formas, se irá convirtiendo cada vez más en una hipótesis real para la clase dominante, a medida que se agudice la crisis de legitimidad y los mecanismos de dominación tradicionales vayan descomponiéndose. 3.La socialdemocracia no presenta a escala europea

ningún tipo de alternativa a las políticas actuales, ni ninguna agenda propia de salida a la crisis diferenciada de la de la derecha y la del propio capital financiero. En los países de la periferia la socialdemocracia (PASOK, PSOE, PS...) ha colaborado activamente en la aplicación de las medidas de ajuste. En Alemania el SPD no cuestiona tampoco, de forma real, la austeridad de Merkel ni el relato oficial de la crisis que culpabiliza a los “trabajadores del sur”. No podría descartarse que en un futuro una mayoría socialdemócrata en los países claves de la UE pudiera plantear alguna ligera variación o “respiro” a los países en peor situación y se optara por abrir un poco la válvula para soltar vapor, con el objetivo de paliar el agravamiento de las tensiones sociales, pero difícilmente habría ningún cambio serio de rumbo. A pesar de toda la pompa mediática las expectativas con Hollande, para quien las tuviera, han quedado rápidamente defraudadas y, a pesar de todas las promesas electorales, el presupuesto de su gobierno mantiene el compromiso con las políticas de austeridad (reducción del déficit del 4'5 al 3% el próximo año y al 0% el 2017) y apoya el pacto fiscal a escala europea.

La socialdemocracia aparece hoy como una corriente históricamente agotada y sin proyecto político propio. Donde ha aplicado políticas de austeridad paga un precio político enorme. Aunque conserva todavía, con formas distintas en función de casa país, amplios aparatos político-electorales, resortes en algunos sectores de la sociedad y en los sindicatos, el control o afinidad con medios de comunicación y, a pesar de todo, sigue contando con una cuota importante de apoyos electorales y en muchos países (Gran Bretaña, Alemania...) es el único recambio disponible a los gobiernos conservadores hoy existentes. En la Europa mediterránea la crisis de la socialdemocracia adquiere una intensidad cada vez mayor aunque con grados diferentes. En Grecia el PASOK ha sido destruido y sus intenciones de voto están por debajo del 10%. En el Estado español el PSOE no remonta en las encuestas ni capitaliza el desgaste del gobierno derechista del PP y, al contrario, pierde apoyo electorales y credibilidad social a marchas forzadas. En Portugal el PS conserva una cuota electoral importante y capitaliza en cierta forma el desgaste del gobierno de Passos Coelho combinando un radicalismo verbal hipócrita contra los recortes y un apoyo de fondo a las políticas de austeridad. Pero todo apunta a que cuando el maltrecho Passos Coelho caiga tendrá que comprometerse de nuevo en la gestión de la austeridad, ya sea en un gobierno de unidad o bajo otra forma, que lo desgastará irremediabilmente.

Desprovista de un proyecto de transformación y convertida en servidora fiel del poder financiero en un momento donde éste sacrifica a la mayoría de la sociedad para salvarse a a sí mismo, la socialdemocracia del sur de Europa entra en contradicción y en colisión con su base social. La socialdemocracia tuvo un papel clave en la formación de los regímenes postdictatoriales en los años setenta en Grecia, Portugal y el Estado español y su fuerte crisis en estos países es un reflejo más de la crisis más general del orden político establecido entonces. 4.El arranque de una nueva fase en las luchas sociales desde 2011 es claro, aunque éstas siguen siendo muy desiguales en el continente, alcanzando sólo una dimensión de masas o de “rebelión” popular en la periferia mediterránea (con excepciones fuertes como Italia) o en algunos países del Este (Rumanía a principios del 2012...). En otros, como Gran Bretaña, las luchas contra los recortes son notables por los estándares habituales del país, como lo muestra la manifestación del 20 de octubre. La ola de luchas actuales tiene como límites claros, en términos geopolíticos, el hecho de no haber llegado aún a Francia, país clave en las resistencias al neoliberalismo desde 1995 hasta el estallido de la crisis, y a Italia, donde la situación social aún no ha explotado a la “española”. Evitando ser deterministas, lo más previsible es, sin embargo, que a medida que las políticas de ajuste se vayan profundizando junto con la inestabilidad derivada de la crisis, también en estos países tarde o temprano les llegue su “15M”, que tomará formas propias e inesperadas, que desbloquee la situación y marque la entrada en un nuevo ciclo.

La internacionalización del movimiento “indignado” y “occupier” y de las nuevas resistencias a la austeridad es muy desigual. El 15O de 2011 fue un avance importante y representó una jornada de acción global notable, que sería seguida pocos meses después por las protestas de Blockupy Frankfurt en marzo de 2012 en el corazón financiero continental. Pero el nuevo movimiento no ha sido capaz aún de dotarse de estructuras internacionales ni de marcos de trabajo sólidos y de impulsar una dinámica de coordinación internacional que vaya más allá de jornadas globales con acciones simbólicas, como la reciente jornada del 13O contra la deuda. En este escenario hay que trabajar en una triple dinámica: impulsar resistencias nacional-estatales ante los recortes, protestas globales tipo 15O y 13O, y acciones de solidaridad específicas con los países periféricos afectados por el ajuste estructural, con Grecia y el Estado español al frente.

La lógica del ciclo actual es defensiva ante una intensificación sin precedentes de los ataques, y se desarrolla en una correlación global de fuerzas muy desfavorable, pero contiene en su seno elementos ofensivos, en el sentido de ser disruptivos y de tener capacidad de desestabilización del funcionamiento rutinario de las instituciones, y con capacidad de contra-ataque. Las luchas sociales no han conseguido una dinámica de victorias que permitan una acumulación de fuerzas ascendente y las grandes batallas que se han librado en toda la UE en el último año se han perdido. Puede haber, sin embargo, posibilidades de alguna victoria parcial concreta en el futuro, como el caso de la dación en pago, en el Estado español, por ejemplo. La excepción más importante es la reciente victoria en Portugal, con las protestas del 15S que obtuvieron una rectificación relevante de las medidas previstas por el gobierno. Transmiten el mensaje fundamental que todavía falta generalizar: “sí se puede”.

La traducción de las movilizaciones en organización colectiva estable (asociativa, sindical, política...) es aún muy débil (asambleas de barrio inestables y débiles...). El reto es como reconstruir un nuevo bloque social, cuyas bases son todavía frágiles y gelatinosas, en una sociedad fragmentada y desestructurada que articule los intereses comunes desde la comprensión de la pluralidad de lo social.

A pesar de la falta de victorias, aún con una vida cotidiana más desesperada, no hay un sentimiento de derrota las sociedades afectadas por el ajuste estructural. Incluso en Grecia, donde gran parte de la población percibió la derrota de Syriza como el fin de la última esperanza ante la austeridad, no hay un sentimiento de derrota definitivo, una resignación final. No se ha arrojado la toalla. Al contrario, a medida que las políticas de ajuste se endurecen por toda la región euromediterránea las ganas de luchar se multiplican. 5. La capacidad de movilización ciudadana y social en la calle contrasta con las dificultades para hacerlo en el centro de trabajo debido al paro, precariedad y las transformaciones en la organización productiva (subcontratación, externalización...), elementos que dificultan el desarrollo de un nuevo sindicalismo combativo y movilizador. El sindicalismo mayoritario sigue aferrado a un modelo institucionalizado orientado al “diálogo social” que está estratégicamente exhausto. La magnitud de los ataques y la reacción social desde abajo a través de los movimientos “indignados” empuja a los sindicatos mayoritarios, en particular en el Sur de Europa, hacia la lucha, pero sin que esto suponga un cambio de modelo sindical o de reflexión estratégica sobre el agotamiento del “diálogo social”. Mantienen una orientación en zigzag (movilización, intento fallido de diálogo social, movilización ante nueva agresión y así sucesivamente), desgarrados entre su orientación hacia una concertación inviable y la necesidad de movilizarse para defender los derechos sociales y su propio futuro en tanto que organizaciones, pero anclados en su mentalidad institucional y burocrática y en la voluntad de no mezclarse con las luchas y movimientos sociales que no controlan.

A escala europea la Confederación Europea de Sindicatos no ofrece ninguna alternativa coherente de resistencia a los planes de ajuste ni un intento de articular la solidaridad internacional de las y los trabajadores. La fractura entre los sindicatos del sur y los del centro y norte-europeos se ha ensanchado y profundizado con la crisis y la aplicación de las políticas de ajuste. Éstos últimos aceptan, de forma más o menos explícita, el relato oficial de los gobiernos centro y norte-europeos y de la troika de que la responsabilidad de la crisis es culpa de los trabajadores del Sur de Europa, poco productivos, derrochadores y que no pagan impuestos. Esta argumentación sirve a gobiernos y élites financieras centro y norte-europeas para desplazar las contradicciones sociales domésticas hacia afuera.

La jornada del 14 de noviembre, con Huelgas Generales en Portugal, el Estado español, Grecia, Chipre y Malta, la Bélgica francófona y un paro de 4 horas en Italia sostenido por la CGIL es un paso adelante en la coordinación sindical internacional de una respuesta a las políticas de austeridad, que va mucho más allá de lo hecho hasta ahora tradicionalmente (jornadas de euromovilización sindical simbólicas). La dimensión internacional del 14N sirve para reforzar el éxito de las propias convocatorias nacional-estatales al darles mayor credibilidad y para ir generando en el imaginario colectivo de los trabajadores euromediterráneos la percepción de formar parte de un movimiento internacional solidario de respuesta a las políticas de ajuste. Una “eurohuelga” o “huelga euromediterránea” sirve más para ello que décadas de trabajo burocrático de lobby sindical en Bruselas. Si el 14N queda en una excepción tendrá poca relevancia. Si sirve para marcar un punto de inflexión en la internacionalización de la estrategia del sindicalismo oficial será un avance notable, aunque insuficiente. 6. La izquierda a la izquierda de la socialdemocracia tiene dificultades para desarrollarse en el marco de la crisis y la traducción político-electoral de las resistencias sociales sigue siendo limitada y contradictoria. La izquierda capitaliza menos el malestar social que la extrema derecha o la derecha populista. Las razones de fondo hay que buscarlas en fenómenos ya conocidos: el peso de las derrotas políticas de las últimas décadas, la ausencia de referentes ideológicos, la despolitización, la falta de credibilidad de los partidos. El ascenso de la extrema derecha por todo el continente se fundamenta en la xenofobia como denominador común y la explotación del malestar social derivado ahora de la crisis y, ya desde antes, por la destrucción del Estado del bienestar durante décadas de neoliberalismo. La extrema derecha toma la forma, aunque con muchas variantes país por país, de una “derecha nacional” populista (que en algunos casos es una derecha neofascista “camuflada”), con la excepción de Aurora Dorada en Grecia cuyo modelo es directamente el fascismo y el nazismo de los años treinta.

La desafección ciudadana ante los grandes partidos, sin embargo, se profundiza así como el castigo electoral a los gobiernos (de derechas o social-liberales) de turno en cada país. Y en los países de la periferia la socialdemocracia, como señalábamos antes, sufre una crisis histórica al entrar en contradicción directa con su base social. Aparecen en varios lugares fenómenos cuya emergencia expresa a la vez esta desafección y malestar, de un lado, y la ausencia de visiones alternativas coherentes, del otro. Tal es el caso de los éxitos del Partido Pirata primero en Suecia y ahora en Alemania, con un voto joven de clase media desidentificado con socialdemocracia y Verdes (y aunque sea un fenómeno muy diferente, también se puede mencionar la candidatura populista-demagógica de Beppe Grillo en Italia). A pesar de todo, el doble contexto de crisis capitalista y aumento de las luchas sociales y de repolitización (aún partiendo desde muy abajo), es un telón de fondo favorable de las fuerzas de izquierda en Europa.

A la izquierda de la socialdemocracia la relación de fuerzas entre las corrientes anticapitalistas y revolucionarias y las fuerzas reformistas se ha degradado a favor de las segundas, aún más, en el último periodo. Muchas formaciones reformistas se benefician electoralmente del descrédito de la socialdemocracia y de la ausencia de alternativas anticapitalistas fuertes, aunque no todas ellas

atravesan un buen momento, y algunas fuerzas relevantes de este campo, como Die Linke en Alemania, han conocido un importante debilitamiento. Los Verdes, por su parte, corren suerte distinta en función de cada país, pero con alguna excepción puntual (como Gran Bretaña) se han convertido en fuerzas muy institucionalizadas y muy a la derecha. La izquierda anticapitalista europea aparece como creíble, en muchos países, en el terreno social y activista, pero no en el terreno electoral. La campaña presidencial del NPA con Poutou es una buena prueba de ello (y a escala más modesta las sucesivas campañas de IA también). Poutou sacó un modesto 1,1% (muy pequeño comparado con el 11,1% de Mélenchon y los anteriores 4% de Besancenot) pero el eco político y social y las simpatías despertadas por su candidatura y sus propuestas fueron mucho más allá de su propio resultado y encontraron simpatías entre personas que optaron instrumentalmente por Melenchon.

Con el retroceso del NPA la izquierda anticapitalista ha “desaparecido” como corriente visible en el terreno mediático-electoral europeo frente a la izquierda antineoliberal reformista, aunque sigue siendo una corriente relevante en el terreno militante y en el activismo social. Formaciones anticapitalistas amplias como el Bloco en Portugal o la ARV en Dinamarca tienen poca visibilidad europea y, a falta de un polo anticapitalista europeo, su política internacional bascula hacia el Partido de la Izquierda Europea impulsado por IU, el FG, Die Linke y otras. No hay que pensar necesariamente que esta situación de ausencia de visibilidad fuerte de la izquierda anticapitalista tenga que estabilizarse así y de nuevo podría haber cambios. En la última década hemos visto ya “ascensos” y “caídas” rápidas de fuerzas diversas (PRC en Italia, Die Linke en Alemania, el NPA en Francia...) y no hay que tomar el actual escenario francés, por ejemplo, como fijo e irreversible, pero sí tomarlo como una realidad ineludible ahora mismo.

Las perspectivas para el grueso de las organizaciones anticapitalistas y revolucionarias europeas, salvo algunas excepciones nacionales, son las de poder construir fuerzas activistas, con peso relevante en las luchas, pero con incapacidad, al menos en el corto plazo, para convertirse en referentes político-electorales fuertes, en un momento donde esto es más necesario que nunca ante el avance de las políticas de ajuste y la reorganización social que implican. Es por ello que hay que ubicar la construcción de organizaciones anticapitalistas y revolucionarias en el marco de una perspectiva más amplia de construcción de nuevas herramientas políticas unitarias que tomarán formas distintas país por país y que puedan adquirir una audiencia e influencia de masas.

El ascenso de Syriza marca la dinámica de la izquierda europea y toda ella se ha visto interpelada por su irrupción. Se ha convertido en el referente concreto en Europa de que es posible articular un proyecto político-electoral capaz de disputarle la hegemonía electoral a la socialdemocracia y tener vocación de mayoría. Si no comete grandes errores, su influencia en la izquierda europea previsiblemente irá en aumento en un contexto de ausencia de otros grandes referentes. No es una formación anticapitalista y su dirección se ubica en posiciones “reformistas de izquierdas”, con un programa y una estrategia que no va “hasta el final” en un planteamiento consecuente de ruptura, pero es un proyecto que se sitúa a la izquierda de IU, del Front de Gauche, o de Die Linke. Su componente reformista de izquierdas cohabita con corrientes radicales en su seno que, aunque minoritarias, tienen un cierto peso y, sobretodo, el proyecto político de Syriza se desarrolla en un contexto de levantamiento popular. La evolución de Syriza es incierta y estará sometida a dos presiones contradictorias: la lógica de la gobernabilidad y de la respetabilidad institucional, de un lado, y la radicalización social creciente como consecuencia de la intensificación de los ataques sociales, del otro. Las y los anticapitalistas no tenemos que idealizar acríticamente Syriza, ni tampoco tener una actitud sectaria. Tenemos que reivindicar lo que nos corresponde de ella y mostrar nuestras simpatías por su ascenso social y electoral y por lo que ello significa, así como buscar una interlocución con su dirección y profundizar la relación con las corrientes de su ala

izquierda. Más allá de la “Syriza real”, el “símbolo Syriza” se ha convertido en el ejemplo de que “es posible” construir una alternativa. Este es el principal significado que tiene para la izquierda europea. 7. En los países donde ha estallado la rebelión social contra el ajuste hay una fuerte politización social, aunque es una politización contradictoria y que empieza remontando desde muy abajo, y sin referentes claros (políticos, culturales, intelectuales, históricos, organizativos...), o con referentes excesivamente confusos y de resultados reales poco definatorios (aunque paradójicamente muchas veces aparezcan idealizados como la “revolución” islandesa o los procesos latinoamericanos). Esta politización no empuja todavía hacia la organización de instrumentos políticos, ni tan siquiera de estructuras sociales estables, pero ha quedado atrás el período de lo que Daniel Bensaïd llamaba la “ilusión social”, de autosuficiencia de la lucha social propia de los años noventa y la primera década del siglo XXI, o de las ideas de “cambiar el mundo sin tomar el poder” estilo Holloway (no en vano las revoluciones árabes, con los intentos populares de derribar el poder y la caída de los dictadores son el acontecimiento fundacional que permanece en el imaginario de la juventud radicalizada contra la austeridad en Europa). Cada vez más la “cuestión política” aparece como insoslayable ante la virulencia de los ataques a las condiciones de vida por parte del poder y la deslegitimación que dichos ataques provocan, precisamente por su profundidad, a partidos e instituciones. En términos históricos la variable más relevante es la incorporación del grueso de activistas sociales, de la izquierda social hoy no políticamente organizada, a la construcción de nuevas herramientas políticas.

En la periferia euromediterránea, la aplicación de planes de ajuste estructural sacude a toda la sociedad, tiende a dinamitar el sistema de partidos y a hacer estallar los mecanismos tradicionales de representación. Ante la profundidad de los ataques, el descrédito de la socialdemocracia, y la urgencia desesperada de obtener soluciones, a veces el debate sobre la “alternativa”, sobre el “instrumento político” se transforma directamente en debates, estratégicamente apresurados y que partiendo de una necesidad real corren el riesgo de “quemar etapas”, sobre como formar una “alternativa de gobierno” a la “latinoamericana”.

La politización en ascenso y el aumento de las luchas sociales empuja, a la vez y contradictoriamente, tanto hacia el apoyo instrumental a la izquierda tradicional, como a la formación de nuevas alternativas al margen de los partidos institucionales. Puede que al final acabe prevaleciendo el apoyo instrumental a lo existente o al revés, que prevalezca la pulsión hacia lo nuevo. Posiblemente ambos acaben recombinándose. La clave será entonces cómo y con qué pesos respectivos. Así, como también será determinante qué forma toma lo “nuevo” y si en él prevalece una lógica de transformación radical del sistema o si por el contrario se imponen las corrientes que expresan una crítica más superficial y epidérmica hacia el mundo de hoy.

La dinámica general favorece la radicalización social alimentada por la constatación de la imposibilidad de conseguir cambios reales y la percepción generalizada de que el sistema y los “mercados” son imperturbables. Pero dicha radicalización se encuentra también con límites importantes, debido a la debilidad de la izquierda, la falta de referentes, el peso acumulado derrotas, la falta de expectativas de cambio social, la poca claridad estratégica de muchos movimientos y, en muchos casos, la radicalidad se expresa más en las formas de luchas y en su dinámica que en términos estrictamente programáticos. El reto de fondo del periodo es como esta consciencia antisistémica difusa va adquiriendo mayor consistencia programática y estratégica (clarificando lo que significa ser “anticapitalista”, una “revolución”, cómo se cambia el mundo...).

En algunos países surgirán nuevas herramientas que a lo mejor graviten en torno a fuerzas reformistas pero que ofrecen un perfil de ruptura con la austeridad y conectan con el radicalismo

social en ascenso (quizá Alternativa Galega de Esquerdas en Galiza formación que obtuvo un 9% de votos y 14 diputados en las elecciones del pasado 21 de octubre, sea el ejemplo más reciente). En otras serán las alianzas entre corrientes radicales y anticapitalistas y/o con sectores de la izquierda social el eje de nuevos agrupamientos e instrumentos. Aún con escenarios diversos, con vías distintas y con resultados finales diferentes, la tarea de las corrientes anticapitalistas será trabajar para la formación de nuevos instrumentos políticos de lucha eficaces y para que éstos tengan un programa, una estrategia y una práctica cotidiana lo más avanzados posibles.

En la periferia europea la situación de la izquierda es muy distinta país por país. En Grecia y en Portugal existen instrumentos desde los que hacer política con audiencia de masas. En el primer caso se trata de construir Syriza, reforzar su ala izquierda y mirar de trazar puentes entre ésta y Antarsia, y trabajar para que el grueso del proyecto se mantenga en una posición de ruptura con la austeridad y de no compromiso con la troica. En Portugal se trata de seguir desarrollando al Bloco de Esquerda, cuyas perspectivas electorales vuelven a estar en alza y que aparece como la formación más ligada a los nuevos movimientos de resistencia, en un escenario sin embargo de desconfianza hacia los partidos y la representación político-electoral, algo que lo somete en permanencia a una tensión estructural y a una presión de lo “nuevo” y lo “emergente”.

En el Estado español y en Italia la cuestión que se plantea es otra: la necesidad de reconstruir la izquierda y un instrumento político de lucha y de defensa que tenga audiencia de masas, credibilidad social y credibilidad electoral. Las formaciones anticapitalistas como Izquierda Anticapitalista o Sinistra Critica aunque tienen incidencia social y credibilidad como corrientes activistas no constituyen por sí mismas una referencia política. Organizaciones reformistas como IU en el caso español disponen de credibilidad electoral, y no es descartable que si ésta supera con éxito su tensión interna entre su discurso general de oposición a la crisis y su participación en las políticas de austeridad en el gobierno andaluz, pueda erigirse como un referente político-electoral creciente. Pero al mismo tiempo por sí sola no puede constituirse como la “alternativa”, ni puede transformar en militancia orgánica los apoyos electorales, al carecer de credibilidad política (algo distinta de la electoral), de lazos sociales reales y porque aparece como parte de lo “viejo” y de la política tradicional. La cuestión de la herramienta política aparece, pues, planteada.

El problema encima de la mesa es como reconstruir la izquierda en una sociedad sacudida por un inmenso proceso de transformación social que desestabiliza todas las esferas. A medida que los planes de ajuste reconfiguran la sociedad, sacuden a todas las estructuras políticas y sociales la necesidad de construir nuevos instrumentos políticos se torna más evidente. Partiendo del rechazo a las políticas de austeridad se trata de trabajar para que, como hemos señalado antes, las nuevas herramientas políticas que se vayan configurando tengan una orientación programática y estratégica y una práctica cotidiana lo más rupturista posible y un proyecto de cambio social lo más avanzado y desarrollado posible. Las formas que tomarán los nuevos proyectos políticos a construir serán impredecibles y seguramente adquirirán contornos confusos, con contradicciones y límites programáticos y estratégicos. Se combinará una diversidad de dinámicas nacionales, en función de las tradiciones políticas, el peso respectivo de las diferentes corrientes de la izquierda y la configuración de la izquierda social y sindical. Ajustando la táctica a la diversidad de contextos y al papel respectivo que juegan en cada país, las corrientes anticapitalistas tienen que participar activamente en los intentos y experimentos de construcción de nuevos instrumentos políticos amplios y útiles en aquellos países donde esta tarea está por hacer (¡la mayoría!) y tener, al mismo tiempo, un proyecto propio de construcción y desarrollo ambicioso.

La crisis del sistema euro: análisis y alternativas

Unión Europea / Daniel Albarracín, Nacho Álvarez y Bibiana Medialdea

Domingo, 23 de junio de 2013

[Este artículo, preparado con motivo del Seminario "¿Qué hacer con el euro? La respuesta de la izquierda ante la crisis de Europa" organizado en junio de 2012 por la Fundación de Investigaciones Marxistas, aparecerá a lo largo de 2013, junto a otros textos, en un libro colectivo sobre el Euro editado por el Viejo Topo. (Redacción)]

La UE como proyecto económico y político

El proyecto de Unión Europea (UE) diseñado y efectivamente implementado por las potencias centroeuropeas –representantes de sus principales corporaciones–, dista mucho de la retórica interesada que se esfuerza en identificarlo con valores como democracia, progreso, paz o solidaridad entre los pueblos.

Aunque es cierto que gran parte de los pueblos europeos depositaron sus esperanzas en una Europa que superó el periodo de las grandes guerras desarrollando democracias liberales y un marco económico de relativa prosperidad, tal percepción no debiera difuminar el sentido económico y político que encarna la UE realmente existente. El hecho de que la población europea haya depositado en la UE y en sus instituciones (entre ellas el euro) una gran carga simbólica relacionada con el progreso y la democracia, explica precisamente que a pesar de que el proceso de construcción adolezca desde sus inicios de carencias democráticas fundamentales, se hayan aceptado sacrificios enormes en su nombre. En este contexto se entiende cómo se naturalizó sin apenas discusión el euro como la guinda de un gran proyecto de civilización que, según el pensamiento dominante, representaba la UE.

Pero más allá de la retórica y la propaganda, lo cierto es que el proyecto de las elites se ha centrado en la construcción a escala europea de un área económica más favorable para la apropiación de ganancia por parte de la clase capitalista europea y mundial. El objetivo fundamental, por tanto, era el de superar las restricciones que los marcos nacionales suponían para la maximización del beneficio. Buena parte de dicho proyecto descansó sobre el proceso de “ajuste salarial”: se trataba de, a través de diversos mecanismos, contener el crecimiento salarial en todas sus componentes – salario directo, indirecto y diferido–, mejorando de esta forma las condiciones para la rentabilidad empresarial (Sanabria, 2009). El referido ajuste salarial ha sido intensamente impulsado desde Bruselas en varias dimensiones, entre las que destacan, por un lado, las “contrarreformas” neoliberales centradas en la privatización de actividades económicas potencialmente rentables, la apertura externa de las economías nacionales y la liberalización de mercados fundamentales, entre los que cabe destacar el laboral y el financiero (Álvarez, 2012).

Además, el ajuste salarial se ha impuesto gracias a una férrea disciplina en la política económica, que ha limitado enormemente el margen de maniobra de los distintos países para desarrollar una

gestión autónoma y ha forzado una orientación económica claramente favorable a los intereses del capital, especialmente del financiero.

En primer lugar, la imposición de un tipo de cambio irreversible por la existencia de la moneda única ha impedido compensar los desajustes de competitividad por la vía de la devaluación monetaria (Gutiérrez et al., 2012). En tales circunstancias (es decir, en ausencia de política cambiaria) y en un mercado mundial donde la división internacional del trabajo atribuye papeles bastante jerarquizados y cerrados, las economías europeas se ven presionadas a adaptar a la baja su política salarial para equilibrar sus cuentas exteriores. Aunque, a la luz de la experiencia, es obvio que esta política no ha conseguido reducir los desequilibrios externos, sí ha servido sin embargo para mantener una intensa presión sobre el crecimiento de los salarios en la UE; es a lo que algunos autores se refieren con el nombre de “devaluación interna”.

En segundo lugar, el marco comunitario ha ido restringiendo hasta la asfixia actual las posibilidades de la política fiscal. Desde los criterios de convergencia de Maastricht (con objetivos muy estrictos en materia de déficit y deuda pública), pasando por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (que convierte en permanentes dichas restricciones fiscales) hasta el más reciente Pacto del Euro, se ha ido institucionalizando la obligación de aproximarse al equilibrio presupuestario. Esta obligación, en un contexto de desfiscalización de las rentas del capital y de los grandes patrimonios, ha conllevado una presión sistemática sobre el gasto público y ha forzado a los estados europeos a endeudarse en los mercados. El resultado ha sido una permanente contención, cuando no deterioro, del gasto público social en la UE y un estrecho margen para políticas públicas de inversión, cruciales para la generación de empleo y la necesaria reconversión de los modelos productivos. Además, la libre movilidad de flujos financieros dentro de la UE ha causado rebajas fiscales competitivas para perseguir la atracción de capitales, lo que también ha deteriorado la capacidad recaudatoria de los Estados.

En tercer lugar, el establecimiento del euro supuso que los estados nacionales perdiesen su capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública a través de sus bancos centrales. El establecimiento de un único banco central, el BCE, debería haber suplido estas funciones. Sin embargo, no ha sido un verdadero banco central europeo, sino más bien un lobby de la gran banca: dicha institución tiene prohibido prestar dinero directamente a los Estados, aunque sí puede hacerlo con la banca privada. Esta prohibición ha determinado un privilegio fabuloso para la banca europea durante la última década en la medida en que –mientras ella recibía financiación ilimitada del BCE a tipos de interés reducidos– los Estados se han tenido que endeudar con esa misma banca a tipos y condiciones de mercado.

El mandato exclusivo del BCE ha sido velar por el control de la inflación (medida muy favorable para los inversores financieros internacionales), aunque fuese en detrimento de los niveles de empleo o a costa de un euro sobrevalorado que durante la última década perjudicó las exportaciones europeas. Además, la aplicación de una única política monetaria en economías con estructuras productivas tan diversas se ha traducido finalmente –vía diferenciales de inflación y de tipos reales– en un escaso control sobre el crédito intracomunitario y los niveles de endeudamiento y, con ello, en un aumento de riesgo sistémico pero también en un extraordinario negocio bancario.

El “Sistema-Euro” ha quedado así constituido como la articulación del conjunto de Tratados que apuntalan las instituciones de la UE, una política fiscal basada en la austeridad y un BCE ajeno al control democrático de los parlamentos europeos.

La Unión Económica y Monetaria (UEM) arrancó como un proyecto que pretendía unificar bajo una misma moneda economías con estructuras productivas y niveles de productividad muy diversos. En ausencia de instituciones fiscales supranacionales y de flujos interterritoriales significativos que pudiesen modificar las distintas bases productivas nacionales

Debe tenerse en cuenta que el peso conjunto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión ha sido durante la década de 2000-2010 de aproximadamente un tercio del presupuesto comunitario, es decir, apenas un 0,2-0,3% del PIB de la UE., dicho proyecto estaba abocado a la inestabilidad económica y política: shocks asimétricos en las economías de la UEM generarían crisis difícilmente resolubles en el marco de dicha unión, y agudizarían las divergencias.

De este modo, la hipótesis neoliberal por la cual la liberalización de los movimientos de capitales, la convergencia nominal y la disciplina presupuestaria y salarial bastarían para asegurar la convergencia real de las economías, ha resultado ser un mero discurso autojustificativo.

Las consecuencias de tal estrategia han resultado evidentes, tanto en lo que al deterioro de las condiciones del mundo del trabajo se refiere como sobre las políticas de bienestar públicas. Valga como ejemplo el hecho de que la remuneración de los asalariados sobre el PIB ha pasado del 59,6% al 57,2% para el conjunto de la Eurozona entre 1995 y 2012 (según datos de AMECO). Así, y en contra de la retórica oficial, la UE se ha mostrado incapaz de materializar el progreso y la democracia prometidos, acumulando una enorme deslegitimación social. Se ha revelado, de hecho, como un modelo que impide la convergencia y la solidaridad real entre países.

Las asimetrías internas como elemento constituyente del proyecto europeo

Habitualmente NNse presentan las divergencias económicas y sociales existentes entre los países de la UE como una consecuencia de que el proyecto europeo aun no se encuentra desarrollado en toda su plenitud. En otros casos, dichas divergencias se han formulado como “insuficiencias” del propio proceso de convergencia. Sin embargo, un análisis de las dicotomías productivas, comerciales, financieras y sociales delata que, en realidad, éstas forman parte constituyente del proyecto de la UE, en tanto que son claramente funcionales al logro de los objetivos a los que nos hemos referido al comienzo. La llamada “Europa de dos velocidades”, o la fractura actual entre la Europa periférica y la de los Estados centrales, no son resultado de un fallo ni de un retraso en la implementación del proyecto de la UE, sino que resultan consustanciales a su diseño y propósito. Lo cual no es óbice para que, según muestra la crisis actual, estas asimetrías estructurales generen dinámicas insostenibles.

Bien es cierto que durante unos años se dio un proceso de convergencia “nominal” entre las economías europeas, sintetizado en el cumplimiento por parte de todos los países de los “criterios de convergencia” establecidos en el Tratado de Maastricht como requisito para formar parte de lo que sería la UEM. Este proceso limitaba la convergencia exclusivamente a variables monetarias (inflación, tipos de interés, déficit público y deuda pública), ignorando la puesta en marcha de instrumentos que facilitasen la convergencia real de las economías

Véase la nota 1 sobre las limitaciones presupuestarias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. .

Es más, en las últimas décadas se ha producido incluso un significativo proceso de equiparación de los PIB per cápita de los países de la UE. Sin embargo, esta aproximación en los niveles de renta tampoco ha supuesto una verdadera convergencia en las estructuras económicas y financieras de los distintos países. Así, durante este periodo se han mantenido –en incluso se han profundizado en algunos casos– especializaciones productivas y comerciales divergentes en el seno de la UE (Álvarez y Luengo, 2011): mientras que Alemania y el norte se han especializado en industrias de alta tecnología, financieras y de gran distribución comercial, las economías periféricas (especialmente las mediterráneas) lo han hecho en actividades industriales auxiliares o de servicios, de mucho menor valor añadido (el caso español de “sol, playa y ladrillo” es paradigmático en este sentido).

En estas condiciones, el resultado ha sido que los países del Sur han visto degradarse su competitividad respecto a los países del centro de la UE. Habitualmente los economistas ortodoxos (incluido, por ejemplo, Krugman, 2012) atribuyen dicha pérdida de competitividad –que se encuentra en parte detrás de la crisis, al haber contribuido a la fuerte divergencia en las balanzas de pagos intraeuropeas– al intenso crecimiento de los salarios en los países del sur. Sin embargo, esta afirmación no se corresponde ni con la causa ni con la realidad. De hecho, por regla general el coste laboral unitario real se ha mantenido o ha bajado en casi todos los países de la UE, debido a que los salarios reales han crecido por debajo de la productividad. Así, según datos de AMECO, mientras que la productividad por empleado ha crecido en la zona euro un 2,1% al año entre 1995 y 2011, el salario real medio apenas creció un 1,5% anual durante este periodo. La pérdida de competitividad de los países del Sur no responde a un mayor crecimiento de los costes laborales unitarios, sino a otros factores. Entre estos destacan factores estructurales como la reducida productividad de los países del sur o la escasa reinversión del excedente producido. Desde el punto de vista de la competitividad-precio, han resultado clave las diferencias estructurales de inflación entre el norte y el sur. Así, aunque la disciplina salarial ha operado, ésta no ha bastado para asegurar la convergencia de las tasas de inflación.

Esta "inflación estructural" propia de cada país ha venido determinada por varios factores (Husson, 2012): 1) el ritmo de crecimiento de cada país (economías con un nivel de demanda interna más elevado, como la española, han presentado inflaciones más intensas); 2) diferencial salarial existente entre el conjunto de la economía y el sector manufacturero (este último suele actuar como referente del crecimiento salarial); y 3) el conflicto distributivo (particularmente vinculado al incremento de los márgenes empresariales allá donde las patronales tienen más resortes de poder para imponer precios).

¿Qué consecuencias ha tenido este diferencial estructural en las tasas de inflación? En primer lugar, se ha traducido en la pérdida de competitividad-precio a la que nos hemos referido, que ha colaborado en los crecientes déficits exteriores de las economías periféricas frente a los intensos superávits de las centrales. Pero además, los diferenciales de inflación han conllevado una divergencia creciente de los tipos de interés reales entre los países: los que necesitaban financiación externa creciente para cuadrar sus crecientes déficit por cuenta corriente se han visto favorecidos simultáneamente por tipos de interés reales muy reducidos (dada la existencia de una moneda única). Esto ha estimulado una enorme afluencia de flujos de capitales a los países del Sur. También hay que tener en cuenta que el aumento del consumo privado basado en endeudamiento registrado por las economías deficitarias (Irlanda, España, Portugal y Grecia son ejemplos claros), ha

agudizado esta evolución dicotómica entre los saldos comerciales de una y otra parte de Europa.

En ausencia de moneda única, estas crecientes divergencias intraeuropeas no habrían quedado “ocultas”, ni podrían haberse prolongado tanto tiempo: los mercados hubiesen atacado las monedas nacionales de los países del sur y éstos se habrían visto obligados a devaluar.

Por otra parte, observar estas asimetrías nacionales no equivale a infravalorar el conflicto de clases en Europa. Al mismo tiempo que hemos asistido a una subordinación de la periferia respecto del centro y norte europeo, las clases trabajadoras de todos los países europeos han visto cómo se deterioraban sus condiciones de vida. Por ejemplo, la clase trabajadora alemana ha padecido duros deterioros en sus salarios y en sus condiciones laborales: no olvidemos que existen más de siete millones de minijobs en ese país y que los salarios reales por empleado retrocedieron un 0,8% entre 2000 y 2009, según datos de AMECO. Es el precio del éxito alemán en la loca carrera por exportar y captar el mercado regional europeo de manera ventajosa.

En definitiva, parece claro que el proyecto europeo no ha facilitado la convergencia real de las economías, sino que ha estimulado un patrón dual. Lo que sí ha facilitado es la “ocultación” temporal de estas disparidades crecientes, visibilizando un proceso de equiparación de la capacidad de consumo que no era sostenible, pues se apoyaba en un desmesurado endeudamiento. Una vez que estalla la crisis y las contradicciones se hacen patentes, también la distancia y el empeoramiento en las condiciones de vida salen, tenaces, a la luz.

El papel del euro en la gestación de la crisis de deuda soberana actual

En un contexto de crisis sistémica como la actual, donde son varias y de diferente naturaleza las crisis que se superponen entre sí (crisis financiera, fiscal, económica, pero también del esquema de reproducción social –cuidados, trabajo doméstico, crisis demográfica-, ecológica y de orden político) resulta obligado comenzar haciendo algunas aclaraciones que delimiten el significado y alcance de lo que se conoce como “crisis del euro”.

Por un lado, parece que la crisis del euro adopta la forma de crisis de sobreendeudamiento; un sobreendeudamiento de origen fundamentalmente privado –en 2009 incluso en Grecia la deuda del sector privado, un 57% del PIB, era mayor que la de titularidad pública (Lapavistas et al.; 2011)–. Pero como sabemos, esta dinámica que ha terminado por detonar la crisis no es exclusiva de los países de la Eurozona, tratándose, en realidad, de un proceso más general y profundo. Así, aunque la especificidad institucional y económica de la Eurozona añada contradicciones y debilidades que se expresan en una gravedad y particularidad propia, la llamada crisis del euro remite a procesos y factores estructurales que van más allá de dicha especificidad. La crisis, a finales de 2012, sigue presentando una dimensión mundial, siendo el euro su eslabón más débil.

La ofensiva neoliberal que tiene lugar en los países desarrollados desde la década de 1980 (en respuesta a la crisis de los años setenta), despliega el proceso de financiarización. Este proceso –que en definitiva refleja la restitución del poder del capital financiero fruto de la liberalización de los

mercados de capitales— constituye una huida hacia adelante frente a los problemas de rentabilidad en el ámbito productivo.

Una de las características esenciales de este proceso ha sido la progresiva acumulación de activos financieros respaldados de forma cada vez más limitada por la riqueza real producida; es decir, la acumulación de “capital ficticio”. Esta creciente disociación entre la actividad financiera —con elevadas rentabilidades y elevadísimos ritmos de crecimiento— y la actividad productiva —con una rentabilidad y un crecimiento relativamente estancados— ha resultado finalmente, como no podía ser de otro modo, insostenible. Así, el proceso de financiarización (a escala mundial y europea) ha colapsado una vez que los inversores, las instituciones financieras y las empresas han constatado que ni los beneficios obtenidos ni los ingresos familiares estaban soportando ya el valor de las acciones, los préstamos hipotecarios, las obligaciones de deuda o los títulos derivados.

Ahora bien, más allá de este marco general, el euro no ha resultado neutral en la crisis. Si una vez producido el estallido de las hipotecas subprime y la quiebra de Lehman Brothers, el euro se ha convertido en el nuevo “eslabón débil” de la economía mundial, es debido a la inestabilidad y contradicciones específicas acumuladas durante años, que han puesto en entredicho la propia pervivencia de la moneda común y han reforzado con ello la crisis económica mundial.

Según se ha explicado, la apuesta por un mercado unificado y una moneda común a partir de espacios económicos no integrados, ha generado ese esquema asimétrico aunque complementario al que anteriormente nos referíamos: dada la financiación fácil y barata para la periferia, la libertad total de los flujos financieros intracomunitarios, y la “seguridad” de la moneda común, durante la última década aparecieron economías “locomotoras” (como España) que empujaron el crecimiento de la zona euro a base de un fuerte endeudamiento, proveniente de las economías “vagones” (como Alemania) cuya demanda se vio empujada por las exportaciones hacia estas economías, reciclándose de este modo su superávit como préstamos a la periferia.

Una vez explicada la especificidad del proceso de sobreendeudamiento privado en la Eurozona, conviene detenerse a detallar la secuencia mediante la cual la situación deviene en una crisis de deuda pública. Para ello hay que tener en cuenta dos dimensiones.

En primer lugar, el impacto mecánico que la crisis tiene sobre los estabilizadores automáticos y, consiguientemente sobre el déficit y deuda públicos, es distinto en cada una de las economías europeas. Esta influencia depende de las diferentes características nacionales: la estructura impositiva, la importancia previa de la burbuja inmobiliaria como fuente de recursos tributarios o el impacto de la crisis sobre el empleo (derivado a su vez de la respectiva estructura productiva y de la política industrial). Algunos países vieron desplomarse su recaudación fiscal, deprimirse su actividad económica altamente dependiente de sectores que se paralizaron (como el de la construcción en España), y no contaron con resortes para activar una política pública de inversiones capaz de contrarrestar la crisis. Simultáneamente, estos países vieron cómo el gasto social, como por ejemplo el de desempleo, se disparaba. Efectivamente, los países periféricos (precisamente los más endeudados) son los que reproducen este patrón y por tanto trasladan a sus sectores públicos un impacto mucho mayor.

En segundo lugar, con la crisis se pone en marcha un proceso de socialización de las deudas privadas (Medialdea, 2012): las deudas privadas (por ejemplo la de los promotores inmobiliarios y la de los bancos en España) van siendo progresivamente asumidas por el Estado. Esto incrementa tanto el déficit como la deuda pública y hace que los inversores teman sobre la viabilidad de los pagos futuros. Este trasvase de pasivos supone también una generalización de la percepción del riesgo que tienen los acreedores. Así, la subida de las primas de riesgo responde a la imposibilidad de separar el riesgo soberano del riesgo bancario.

Tanto la UE como los Estados miembro han comprometido enormes sumas con los rescates de los sistemas financieros, lo que ha contribuido –y en algunos casos ha determinado– el fuerte crecimiento de los déficits fiscales. Según datos de la Comisión Europea

Véase el informe Report from the Commission.State Aid Scoreboard. Report on state aid granted by the EU Member States (Autumn 2011 Update) <http://ec.europa.eu/competition/sta...> , entre el 1 de octubre de 2008 y el 1 de octubre de 2011 el volumen de ayudas efectivamente utilizadas por los bancos europeos se ha elevado a 1,6 billones de euros (el 13% del PIB de la UE), situándose las aportaciones por recapitalización y compra de activos tóxicos en 409.000 millones de euros (el 3,3% del PIB de la UE).

En estas condiciones, los indicadores fiscales se deterioran con rapidez y la credibilidad sobre la sostenibilidad futura de las cuentas públicas lo hace a una velocidad aun mayor. Los actores financieros privados, lo que viene a llamarse los “mercados”, dudan razonablemente sobre la capacidad de algunos Estados de hacer frente a sus obligaciones financieras, prevén que las deudas públicas pueden seguir creciendo aceleradamente fruto del proceso de socialización de las deudas privadas y recelan sobre la continuidad futura de una moneda común en la que se emiten activos financieros percibidos como extremadamente heterogéneos. Por estos motivos, los inversores se desprenden y especulan contra los activos financieros procedentes de las economías periféricas, lo cual empeora las condiciones en las que dichos países pueden financiarse en los mercados financieros privados. Es así como la espiral se retroalimenta y los indicadores fiscales siguen deteriorándose a la par que los pagos de intereses de los deudores se disparan. Las dudas sobre las posibilidades de pago futuro de los Estados inmersos en dichas dinámicas de endeudamiento acelerado se alimentan y, con ellas, la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la moneda europea.

La gestión de la crisis por parte de la elite europea: una destructiva huida hacia adelante

De momento, y cabe pensar que ese será también el horizonte a medio plazo, la orientación de la gestión de la crisis a escala comunitaria puede caracterizarse como una nueva huida hacia adelante que insiste en ahondar la espiral de maximizar los pagos de la deuda/austeridad/recesión.

Aunque dicha orientación no se expresa de forma coherente y cohesionada –hay matices de orden menor, por ejemplo, entre las consignas alemanas, las recomendaciones más suaves del FMI, o el inoperante socialiberalismo representado por Hollande que no va más allá de introducir modificaciones que corrijan superficialmente el funcionamiento del sistema euro–, sí es posible detectar una dirección clara que recuerda a la gestión de la crisis de la deuda externa latinoamericana durante los años ochenta (Medialdea y Sanabria, 2012): imposición de una interlocución claramente favorable a los intereses de los acreedores (la troika en este caso juega el papel que antaño jugara el FMI en solitario); supeditación de la gestión económica de los países

deudores al objetivo prioritario de maximizar el pago de su deuda (lo que conocemos como el ajuste o las políticas de austeridad); habilitación de mecanismos institucionales dirigidos a blindar dicho objetivo anulando la soberanía económica de los países (la condicionalidad asociada a los créditos del FMI da paso a los memorándum que condicionan los rescates); y, por último, el escenario de recesión prolongada con sus correlatos en términos de destrucción económica y severo deterioro social. Cada vez hay más fundamento, de hecho, para plantearnos que estemos caminando hacia una “década perdida” europea. Pensemos que recientemente el propio FMI preveía que en 2017 Grecia registrará un PIB un 14% inferior al correspondiente al inicio de la crisis (IMF, 2012).

Para intentar garantizar a los acreedores el cobro de la deuda y evitar con ello la desvalorización del capital ficticio acumulado, Bruselas impulsa medidas que discurren en tres ámbitos complementarios: a) Los rescates, ya sean a entidades financieras privadas directamente –con respaldo estatal– o, indirectamente, mediante la financiación en duras condiciones a Estados cuyas cuentas se han visto perjudicadas en gran parte debido a los “rescates nacionales” previos de sus sectores bancarios. Estos nuevos créditos que se conceden bajo este engañoso título vienen a profundizar la socialización de las deudas privadas, vinculándose además con los otros dos ámbitos de actuación; b) La exigencia de mayor austeridad fiscal, lo que se concreta en recortes drásticos de gasto público (particularmente el de naturaleza social); y c) medidas específicas de ajuste salarial, que se materializan en reformas laborales, indexación a la baja de los salarios, desmantelamiento de la negociación colectiva, ataque a los sistemas públicos de pensiones, etc. Asistimos así a una versión moderna y europea de los ajustes impuestos por el FMI en América Latina durante los ochenta. Se trata, en definitiva, de reducir la demanda interna (vía reducciones salariales y del empleo) para garantizar que el “excedente” generado vaya a pagar la deuda (tanto nacional como externa).

Sin embargo, no conviene infravalorar la flexibilidad de la estrategia desplegada por las elites económicas y políticas. Conscientes de las consabidas debilidades del euro, su idea es intentar apuntalar la moneda única sin modificar los elementos centrales del Sistema Euro. Para ello, el Informe Van Rompuy (2012) traza una hoja de ruta que parte de la constatación de tres problemas centrales en la UEM (Ramírez, 2012): a) Los sistemas financieros nacionales pueden desestabilizar sus respectivos países, dado su tamaño y su internacionalización; b) No es posible una moneda única en ausencia de una estrecha convergencia de la política fiscal; c) Los desequilibrios macroeconómicos en la UEM ponen en riesgo la moneda única. A partir de este diagnóstico se levantan tres propuestas que actualmente copan el debate europeo.

En primer lugar, se propone la unión bancaria como fórmula para poner en común los recursos fiscales y financieros de los países miembros y recapitalizar entidades de crédito y garantizar depósitos bancarios. La unión debería contar con un único supervisor bancario europeo (el BCE) y un nuevo fondo europeo (MEDE), al cual aportan los Estados miembros de la eurozona según su peso económico. Este mecanismo de financiación (MEDE) establece que son los países rescatados los que aumentan su deuda nacional, mientras que con el anterior fondo (FEEF) eran los países que aportaban los que cargaban con un incremento de su endeudamiento (Ramírez, 2012). Conviene señalar que este cambio es claramente favorable para los acreedores, lastrando aun más la posición financiera de los países deudores. Por otro lado, se anuncia la Unión Fiscal, como establecimiento de un sistema de “coerción fiscal” entre los Estados miembro que garantice la máxima disciplina en el gasto. Se trata, en definitiva, de profundizar e institucionalizar aún más las restricciones impuestas por el Plan de Estabilidad y Crecimiento. Pensemos, por ejemplo, que la Comisión (un ejecutivo que no se elige mediante votación directa, sino mediante complejos procedimientos indirectos), tendrá la capacidad de examinar los presupuestos nacionales antes de que sean

discutidos en los Parlamentos de cada país. Por último, se plantea como necesaria la publicitada “mejora de la competitividad”, ahondando en el tradicional discurso ortodoxo que centra dicha mejora exclusivamente en la reducción de los costes laborales unitarios.

No parece demasiado probable que estas tres patas puedan darle estabilidad al euro. Además, aunque así fuera, esta estrategia de “salida de la crisis” se haría a costa de la profundización en el ajuste sobre las condiciones de vida y de un enorme retroceso en la soberanía democrática de los pueblos. Las instituciones de Bruselas (a excepción del Parlamento europeo ninguna otra es elegida directamente por ningún tipo de sufragio) serían las que decidirían, ya de un modo explícito y formal, sobre las cuestiones esenciales en el uso de los recursos públicos.

En definitiva la UE, como proyecto de las elites europeas, no ofrece más salida que una “década perdida”, así como la continuidad de los ajustes hasta que se reabsorba el sobreendeudamiento (Álvarez et al; 2009). Es más, sabemos que esta estrategia, como ilustran el caso japonés o el mismo latinoamericano, tenderá a prolongarse en el tiempo sin lograr resultados efectivos ni en términos de reactivación del crecimiento ni de absorción total del endeudamiento; pensemos, por ejemplo, que los indicadores de endeudamiento externo que registra Latinoamérica a principios de los noventa son peores que los que en 1979-82 hicieron estallar la crisis de la deuda externa. A lo que hay que añadir, y no como un dato complementario sino como la principal objeción, que el proceso es profundamente injusto en la medida en que garantiza los intereses de los acreedores a costa del sufrimiento de la población.

En esta situación, cabe refutar cualquier argumentación que caracterice la situación como un nuevo problema de voluntades o de error en el diseño institucional de la UE. Se trata, fundamentalmente, de una cuestión de intereses: las elites financieras y los actores políticos que representan sus intereses tratan de garantizar, cuanto antes, el mayor cobro posible de deuda. Hasta que la parte deudora no sea capaz de tomar conciencia de su posición de fuerza y opte por hacerla valer, no será posible afrontar la situación de manera favorable a las clases populares.

¿La salida unilateral del euro como alternativa?

Partiendo del análisis precedente resulta evidente que revertir la situación económica en Europa a favor de los intereses de la mayoría social requiere, necesariamente, una ruptura clara con los principios constitutivos y la lógica de funcionamiento de la UE. El fin de la moneda única tal y como la conocemos, y de la disciplina económica que impone, forman parte de ese paso necesario. La recuperación de soberanía económica –ya sea a escala nacional o europea– en los terrenos monetario, cambiario y fiscal, así como la capacidad de controlar aspectos básicos como los movimientos de capitales o la normativa que rige la actividad financiera en Europa, aspectos todos ellos directamente relacionados con la existencia del euro tal y como lo conocemos, son elementos centrales. En este sentido, compartimos aspectos fundamentales de los planteamientos de autores como Sapir (2011), Lapavitsas (2011), Montes (2010), Mateo y Montero (2012). Sin embargo, no creemos que la salida unilateral del euro sea la mejor opción a defender actualmente por parte de la izquierda española, ni pensamos que una recuperación de la soberanía económica pase necesariamente por una vuelta al perímetro político y a los instrumentos económicos del Estado-nación.

Partimos de la idea de que, además de romper con la disciplina del euro, una estrategia que priorice

las condiciones de vida de la población exige llevar a cabo rupturas adicionales y complementarias. Entre ellas, cobra especial importancia el cuestionamiento de los pagos financieros asumidos por las economías de la Europa periférica. El volumen de deuda acumulado y, sobre todo, el coste financiero (los tipos de interés) al que se tienen que atender los pagos pendientes son difícilmente asumibles. No se puede y no se debe pagar la deuda en esas condiciones. Porque es injusto y porque es una losa que aniquila cualquier posibilidad de reactivación económica o protección social en las economías deudoras. La única forma viable de que los bancos de los Estados acreedores, y sus gobiernos representantes, se vean obligados a renegociar la deuda pendiente siguiendo criterios de justicia social, es que las partes deudoras (si es de forma coordinada, mejor) anuncien un impago que les permita recuperar la posición de fuerza que, en realidad, les corresponde. Ejemplos como el impago argentino o el anuncio del gobierno ecuatoriano de su disposición a ejecutar un impago parcial demuestran la eficacia de este tipo de medidas. El origen de la crisis es bancario, pero los bancos no aceptarán pagar su parte de la factura hasta que no se vean eficazmente obligados a ello.

Recuérdese, además, que buena parte de la deuda pública asumida por los estados periféricos de la UE es ilegítima (Navarro, 2012): si no se hubiese facilitado la intensa desfiscalización de las rentas del capital durante estas últimas décadas, ni se hubiesen autorizado los paraísos fiscales, los estados no habrían tenido tanta necesidad de acudir a los mercados de deuda. Por otro lado, si el BCE no hubiese tenido prohibido desde su constitución prestar a los Estados miembro (como cabría esperar de una autoridad monetaria y fiscal digna de tal nombre), éstos no tendrían por qué haberse endeudado con el sector privado. Es más, si el BCE hubiese actuado desde el inicio de la crisis del Euro comprando suficientes títulos de deuda de los países con apuros, éstos últimos no habrían experimentado las intensas subidas en sus primas de riesgo, y no tendrían que cargar ahora con estos exorbitados pagos de intereses.

En definitiva, una estrategia favorable a las clases trabajadoras precisa de una ruptura con el pago de la deuda. Ruptura que, además de legítima, es necesaria para quebrar el tercer eje básico que impide el avance hacia una alternativa social y democrática: las políticas de austeridad. Así, la única forma de interrumpir la espiral recesiva y de deterioro social que nos conduce hacia una década perdida europea es la finalización de las políticas de austeridad. Pero ese cambio político es difícil que se produzca sin la previa paralización de la sangría de recursos que supone actualmente el pago de la deuda para la Europa periférica.

Resumiendo: es necesaria una ruptura con la lógica a la que conduce el euro en este contexto, pero dicha ruptura no es la única que debemos realizar. El impago de la deuda, por un lado, y la desobediencia ante las políticas de austeridad (o los memorándum, en su forma institucionalizada), son los otros dos ejes de fractura imprescindibles. Tres elementos de ruptura que, además, se relacionan estrechamente entre sí. Por ejemplo, ¿qué margen de maniobra permitiría la salida del euro si no es porque se pretende suspender también el pago de la deuda pendiente, contraída en euros y cuyo valor se incrementaría de forma automática? El asunto a plantearse sería, más bien, por dónde y cómo empezar este proceso de rupturas diversas pero relacionadas entre sí. Llegados a este punto, el dilema práctico que pensamos debiera plantearse la izquierda es si resulta táctico apostar por la salida unilateral del euro como opción prioritaria para la movilización. La respuesta, eminentemente política, depende del contexto concreto al cual se circunscriba la pregunta. La idea que se mantiene en este texto es que, en las condiciones en las que se encuentra España a finales de 2012, dicha consigna no es la mejor entre las que tiene a su alcance la izquierda política y social.

En efecto, el actual contexto económico pero sobre todo, el político y social, nos lleva a sostener

que es mucho más oportuno apostar por aglutinar fuerzas en torno a la desobediencia frente a las políticas de austeridad, así como avanzar hacia el cuestionamiento del pago de la deuda, en lugar de levantar la consigna de la salida del euro. Dicho posicionamiento, limitado a las coordenadas espaciales y temporales inmediatas y presentes, se basa en dos argumentos: estas reivindicaciones gozan de mayores niveles de legitimidad social y, además, son más propicias para establecer la necesaria coordinación política entre distintos espacios nacionales que el abandono unilateral de la moneda única.

Con estos criterios debe juzgarse la formulación de una alternativa de resistencia, de reforma radical (Buster, 2012): estos programas pueden agotarse en un periodo más o menos corto de tiempo, en función de la evolución de las circunstancias políticas y sociales, pero su importancia radica sobre todo en la capacidad que tienen de incidir en la correlación de fuerzas entre las clases sociales. La construcción de una alternativa no descansa en el diseño de una “hoja de ruta” óptima, sino en facilitar las condiciones para que las clases sociales que deben empujar esa alternativa de reforma radical acumulen las fuerzas necesarias para ello.

El objetivo de realizar rupturas, desde nuestra perspectiva política, obliga a preocuparse por la cuestión de la legitimidad. Aquí y ahora (es evidente que en Grecia, o en nuestro país dentro de uno o dos años, la situación no será equivalente), parece difícil imaginar que una propuesta de salida del euro pudiera atraer a capas mayoritarias de las clases populares y trabajadoras, que mantienen todavía, deteriorada pero vigente, la idea de Europa como referente de democracia y progreso. Y, desde nuestro punto de vista, una medida como la salida unilateral del euro requeriría de un apoyo social muy amplio, no sólo por la carga simbólica que se asocia a la moneda única, sino también por las graves consecuencias materiales que dicha opción tendría para la mayor parte de la población.

Conviene en este punto ser claros con respecto al coste económico a corto plazo que supondría la salida unilateral del euro para un país fuertemente endeudado con el exterior y muy dependiente de las importaciones para su abastecimiento básico. Una salida del euro en este caso provocaría corrimientos bancarios inmediatos, se incrementarían masivamente las fugas de capitales y, finalmente, llegaríamos al temido “corralito”. Los depósitos y ahorros de la población se depreciarían notablemente (tengamos en cuenta, además, que las grandes fortunas ya han sacado sus ahorros de los países de la periferia). Incluso con un repudio de la deuda, el Estado tendría que elegir entre que las familias trabajadoras perdieran sus depósitos y ahorros o tener que socializar buena parte de las pérdidas bancarias que se producirían (en este contexto, nacionalizar los bancos sería nacionalizar también sus pérdidas). Si la salida del euro estuviera gestionada por un gobierno como los actuales, representantes de los intereses de los acreedores, no es difícil imaginarse cuál sería la opción. Y en cualquier caso, un gobierno popular, tampoco tendría “solución buena” por la que optar. Además, como hemos avanzado, la nueva moneda se depreciaría intensamente en sus primeras semanas de vida, generando un incremento automático de la deuda externa. La dicotomía se establecería ahora entre asumir una deuda aun más gravosa que la actual (lo cual abocaría de nuevo a más austeridad) o suspender los pagos de deuda denominada en euros; lo cual evidencia la imposibilidad de lograr conquistas significativas si la salida del euro no fuera acompañada o precedida de la ruptura con la tiranía de la deuda (impago). Por otra parte, la fuerte devaluación de la nueva moneda se traduciría en un importante incremento de los precios de los productos importados. Esto no sólo podría suponer un fuerte incremento del coste de la cesta básica de las clases populares (alimentación, transporte, etc.), implicando en la práctica un proceso inmediato de empobrecimiento en términos reales, sino que frenaría las supuestas bondades de la devaluación para actuar como motor de la recuperación; ésta era, no hay que olvidarlo, una de las principales ventajas que acarrearía la salida del euro.

La salida unilateral del euro entrañaría costes económicos, sociales y políticos de una enorme magnitud a corto plazo. Ese impacto inmediato sobre una población ya muy golpeada por la crisis resulta un elemento crucial, que no se debería ignorar ni infravalorar, a la hora de considerar la oportunidad táctica de plantear dicha reivindicación. No se defiende que dichas consecuencias económicas negativas en el corto plazo impliquen la necesidad de permanecer en el euro a toda costa. Se trataría de buscar el contexto propicio y gestionar la salida de forma que las ventajas que la salida del euro implicara (ampliación del margen de maniobra y de los recursos disponibles) compensaran en el medio plazo estos impactos.

Uno de los criterios para adoptar la salida del euro y abrirse a otra moneda podría ser la posibilidad de construir un proyecto alternativo con otras economías. El punto clave entre que una salida unilateral del euro merezca la pena y no, no es únicamente un balance entre las consecuencias de la permanencia o la salida, sino la oportunidad de un horizonte internacionalista sustentado en un fuerte respaldo social, donde el paso subsiguiente sea la construcción de una nueva área económica supranacional bajo parámetros solidarios. Por tanto, el “momento” o “contexto” no puede ser identificado sólo de una manera “técnica”, como si se tratase de coger al vuelo la oportunidad que viniese dada, sino fundamentalmente política y por tanto implica promover proactivamente también las condiciones para ello.

Precisamente el segundo argumento que nos lleva a descartar la oportunidad de reivindicar la salida unilateral del euro es que esta opción actualmente dificultaría la articulación de salidas colectivas. En efecto, parece más difícil concertar o al menos coordinar salidas colectivas basadas en la suma de salidas del euro por parte de los distintos países que emprender, por ejemplo, movimientos unitarios o coordinados de desobediencia a los memorándum o hacia impagos colectivos de las deudas. En el contexto europeo actual cualquier reivindicación que quiera ser eficaz debe partir del marco nacional en el cual se expresan hoy en día las principales contradicciones y el antagonismo social. Pero su voluntad debe ser la de “empujar” ese nivel de conciencia y la de trascender en su acción reivindicativa dicho marco nacional. Tal y como expresa (Ramírez, 2012:16): “La clase capitalista europea está refundando la arquitectura institucional original que dio pie a la UE y el euro [...] Evitar que semejante empresa concluya con éxito requiere, ante todo, que la clase trabajadora y la izquierda europea sean capaces de superar el marco nacional de la política y plantear alternativas globales favorables a sus intereses que tengan una dimensión continental. En un contexto en el que la política y la relación de fuerzas dentro de cada Estado nación europeo está más que nunca determinado por las dinámicas financieras y económicas a nivel europeo, la clase trabajadora se condena a sí misma al fracaso si, al contrario de lo que hace cada día la clase dirigente, no supera el marco nacional de luchas y coordina su propia política a escala europea” La salida unilateral de un país del euro atomiza más que cohesiona, a la par que invita a apoyarse en estrategias económicas replegadas en lo nacional (es el caso, de la reactivación en base a exportaciones vía devaluación de la nueva moneda). Hacer descansar una alternativa de izquierda sobre la base de una recuperación de las estrategias mercantilistas clásicas, centradas en las devaluaciones competitivas, resulta claramente insuficiente. La experiencia histórica de la década de 1930 evidencia la inviabilidad económica de esta estrategia cuando se implementa de forma colectiva y, con ello, sus enormes riesgos políticos. En un contexto en el que los diversos “intereses nacionales” confronten cada vez con mayor intensidad, será más difícil para la izquierda europea crear espacios supranacionales de solidaridad y convergencia.

En resumen, compartiendo la idea de que romper con la actual disciplina del euro es un paso necesario para la articulación de una salida social y democrática a la crisis, y que es urgente que este

asunto se debata públicamente y se someta a revisión, consideramos que la izquierda del estado español no debe exigir en este momento la salida unilateral del euro. Plantear la ruptura con la actual disciplina del euro no pasa necesariamente por una salida unilateral de la moneda única, en la medida en que esta ruptura podrá tomar en el futuro formas diversas. Precisamente, las posibles formas que esta ruptura pueda adoptar dependerán de las fuerzas políticas y las legitimidades sociales que se vayan acumulando por el camino, y para ello resulta mucho más útil y prioritario avanzar en el cuestionamiento de las políticas de austeridad y del pago de la deuda. Ambos cuestionamientos, ejercidos de forma colectiva desde varios países europeos, pueden llevar a una ruptura con la disciplina del euro que no esté necesariamente abocada a refugiarse en el terreno nacional. Especialmente cuando se da, como ahora, una coyuntura social en la cual la oposición a las políticas de austeridad sí goza de una legitimidad potente, y está en marcha una campaña por la auditoría de la deuda (Albarracín, 2012), que hace trabajo pedagógico con el objetivo de fundamentar la legitimidad y legalidad del impago de buena parte de la deuda española, que cuenta con un arraigo social notablemente mayor que la exigencia de salida del euro.

Bibliografía:

Albarracín, D. (2012): “‘Números rojos’: iniciativas ciudadanas sobre las deudas”.
<http://www.daniloalba.blogspot.com>....

Álvarez, I. (2012): “Capital financiero, Estado y crisis económica en Europa”, *Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales*, nº 3 <http://dl.dropbox.com/u/31989152/N%...>

Álvarez, I. y Luengo, F. (2011): “Desde los desequilibrios comerciales a la crisis económica en la Unión Europea” en Gómez Serrano, P.J. (2011): *Economía Política de la Crisis*, Editorial Complutense, Madrid.

Álvarez, I. et al (2009): *Ajuste y salario. Las consecuencias del neoliberalismo en América Latina y Estados Unidos*. Fondo de Cultura Económica.

Buster, G. (2012): “La Gran Recesión, la crisis de la deuda soberana y las alternativas de la izquierda europea”, *Sin Permiso*, 14/10/2012

Gutiérrez, E. Ayala, I. Gutiérrez, E. Albarracín, D. y Montes, P. (2012): *¿Qué hacemos con el euro?*, Editorial Akal.

Husson, M. (2012): “Economía Política del `sistema euro””, *VientoSur* No. 125, Madrid.

IMF (2012): *World Economic Outlook. Coping with High Debt and Sluggish Growth*, October 2012, International Monetary Fund, Washington D.C.

Krugman, P. (2012): *¡Acabad ya con esta crisis!*, Ed. Crítica, Madrid.

Lapavitsas, C. et al. (2011): “Crisis en la Zona Euro: Perspectiva de un impago en la periferia y la

salida de la moneda única común”, Revista de Economía Crítica, nº 11.

Laskos, Ch.; Milios, J. y Tsakalotos, E. (2012): “Communist Dilemmas on the Green Euro-Crisis: To Exit or Not to Exit?”, Syriza, mai 2012. <http://thetrim1.blogspot.de/2012/02...>

Louça, F. (2012): “The Crisis of Europe: Elements of a Political Strategy”, *Transform!*, Issue 10/2012.

Martinello, P. (2012): “Auditorias ciudadanas de la deuda. Tú gastas... ¿yo pago” . *Números Rojos*, 4.

Mateo, J. P. y Montero, A. (2012): Las finanzas y la crisis del euro: colapso de la Eurozona, Editorial Popular, Madrid.

Medialdea, B. y Sanabria, A. (2012): “La ‘crisis de la deuda’ en Europa: lecciones y alternativas de la experiencia latinoamericana”. *Boletín de recursos de información*, 32, Octubre 2012. Centro de Documentación Hegoa. <http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/...>

Medialdea, B. (2012): “Deuda, banca y Recorte”, *Anuario sociolaboral Fundación Primero de Mayo*, <http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files...>

Montes, P. (2001): La historia inacabada del euro, Trotta, Madrid.

Montes, P. (2010): “¿Adiós al euro? Entrevista a Pedro Montes”, *El Viejo Topo*, 266, 5-11. <http://www.elviejotopo.com/web/revi...>

Navarro, V. (2012): “La estafa de la deuda pública”, *Público*, 30/10/2012.

Ramírez, A. (2012): “Crisis del euro: el verano de todas las alarmas”, *Viento Sur*, 124.

Sanabria, A. (2009): “La naturaleza salarial del ajuste”, en *Ajuste y salario. Las consecuencias del neoliberalismo en América Latina y Estados Unidos*. Madrid. Fondo de Cultura Económica,

Sanabria, A. (2012): “La crisis del euro y la dictadura de los acreedores”. <http://colectivonovecento.org/2012/...>

Sapir, J. (2011): “S’il faut sortir de l’Euro”, Document de travail, CEMI-EHESS, 06/04/2011. <http://gesd.free.fr/sapirsil.pdf>

Van Rompuy, H. (2012): Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria (UEM), Consejo Europeo.

Varoufakis, Y. (2012): “Depresión en la Eurozona. Cómo restaurar la demanda agregada en países como Grecia y España sin crear nuevas burbujas”. *Sin Permiso*.
<http://www.sinpermiso.info/textos/i...>

23/6/2013